

7 de Agosto de 2022



## San Cayetano

ESTE 7 DE AGOSTO LA UTEP VUELVE A LA CALLE POR TIERRA, TECHO Y TRABAJO Y POR LA APROBACIÓN URGENTE DEL SALARIO UNIVERSAL

El 7 de agosto es una jornada de reafirmación de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Su origen se remonta a un hecho histórico de enorme importancia que ha sido silenciado por las distintas ideologías que subestiman la importancia del movimiento obrero y la comunidad organizada en la historia. Se trata de la movilización realizada por la CGT en plena dictadura militar desde Plaza de Mayo hasta el santuario de San Cayetano bajo la consigna Pan, Paz y Trabajo en una muestra de la potencia que tiene un pueblo cuando se afirma en sus organizaciones sociales y reivindica su espiritualidad. Si bien la protesta fue salvajemente reprimida, fue ese grito de libertad y justicia lo que puso en crisis la dictadura.

Este 7 de agosto nos movilizamos para reafirmar nuevamente el derecho al trabajo digno para todo nuestro pueblo en un contexto de gravísima crisis sociolaboral. No se trata ni de un acto oficialista ni opositor. Es el grito de los excluidos, marginados, olvidados que el sistema económico y la mayor parte de la dirigencia política no escucha. Es el grito por derechos tan humanos como la tierra, el techo y el trabajo que deberían ser la prioridad absoluta de cualquier gobierno y lamentablemente se encuentran relegados en la agenda. Es un grito que busca interpelar a todos los factores de poder político y económico de la Argentina para que comprendamos de una vez que nadie se realiza en una sociedad que abandona en la exclusión a la mitad de sus hijos e hijas.

Es un grito que ha sido recogido por quien tal vez sea uno de los argentinos más importante de la historia, el Papa Francisco, quien también es subestimado y despreciado por las elites políticas, económicas y mediáticas de distintos colores. El Papa Francisco afirma: *“los gobiernos que asumen como propia la tarea de poner la economía al servicio de los pueblos deben promover el fortalecimiento, mejoramiento, coordinación y expansión de estas formas de economía popular y producción comunitaria. Esto implica mejorar los procesos de trabajo, proveer infraestructura adecuada y garantizar plenos derechos a los trabajadores de este sector alternativo. Cuando Estado y organizaciones sociales asumen juntos la misión de «las tres T» se activan los principios de solidaridad y subsidiariedad que permiten edificar el bien común en una democracia plena y participativa”*. Si no nos escuchan a nosotros, al menos deberían escucharlo a él.

De eso se trata esta movilización: poner la economía al servicio del pueblo empezando por los últimos que somos nosotros y nosotras. Quien busque motivaciones partidarias detrás de esta movilización se equivoca. Más allá de la participación política de algunos de nuestros y nuestras dirigentes, compañeros y compañeras, opción absolutamente legítima y encomiable, ya que la buena política es una de las “más altas formas del amor”, debemos aclarar por enésima vez que la **Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)** como tal, es una organización gremial independiente de los partidos políticos y el gobierno, que agrupa a los

trabajadores y las trabajadoras de la economía popular para lograr las reivindicaciones de tierra, techo y trabajo. Por eso, la UTEP se mantiene firme y en unidad.

En la actualidad, las trabajadoras y trabajadores argentinos sufrimos nuevas formas de opresión e injusticia que nadie puede negar, agravadas al extremo por la pandemia mundial. Los números son trágicamente elocuentes. Hay poco empleo y de mala calidad. Según el INDEC, menos de la mitad de las y los trabajadores activos acceden a los derechos laborales que marca la ley. Entre estas y estos “privilegiados”, casi la mitad sobrevive con salarios inferiores a la línea de pobreza. Esto quiere decir que aun cuando se tiene el “privilegio” de contar con un trabajo en blanco, el salario no alcanza para vivir. Muchísimo peor están quienes, aunque son empleadas y empleados, no se encuentran registrados y sufren distintas formas de precarización laboral.

La peor parte, sin embargo, la sufrimos nosotros y nosotras: trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Como el mercado laboral no nos da lugar a todos, tuvimos que inventarnos nuestro propio trabajo en actividades como el cartoneo, la venta ambulante, la agricultura familiar, la producción textil, la infraestructura social, los emprendimientos productivos; salimos a recuperar el descarte del consumismo para reciclarlo, las empresas quebradas para ponerlas a producir, las personas quebradas por las drogas y la violencia para abrazarlas con la solidaridad de un pueblo que no se resigna a vivir marginado. Desplegamos una inmensa red nacional de cuidados comunitarios con miles de comedores, merenderos, guarderías, centros de salud y centros educativos que constituyeron la red social, principalmente bancada por mujeres trabajadoras, que impidieron que estalle todo por los aires durante la pandemia. Somos más de siete millones en todo el país de los cuales la UTEP organiza alrededor de un millón.

En la lucha conseguimos reconocimiento a algunos de nuestros derechos, entre ellos, la sindicalización del sector, el salario social complementario, los proyectos productivos “potenciar trabajo”, la ley de barrios populares, la emergencia alimentaria, el reconocimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena. Todas estas conquistas nos enorgullecen aunque su aplicación es lenta y sabemos que estamos lejos de recuperar los derechos que nos robaron.

Recientemente, desde distintos sectores políticos, empresarios y mediáticos, recrudesció la estigmatización y subestimación de los movimientos populares. Personas que no comprenden en absoluto nuestra tarea, la realidad de las barriadas, la labor de los trabajadores de la economía popular, ni el funcionamiento de los movimientos sociales, tanto en el oficialismo como en la oposición, vuelven con el latiguillo gorila de que somos vagas, punteros, planeras. No se trata de críticas constructivas que buscan reorganizar o mejorar las políticas de economía popular sino de ataques que parecieran querer destruir los movimientos, tal vez porque les da miedo que el pueblo pobre tenga poder y capacidad de movilización. En ese sentido, se pone bajo el mote despectivo de “planes sociales” todas las políticas públicas de economía popular y se subestima a la gente diciendo que se las compra con estos planes.

Al mismo tiempo, se ataca a determinados dirigentes y dirigentas, cuando en realidad se busca deslegitimar a todos los movimientos y destruir su obra con la intención de ajustar por lo más delgado. No lo vamos a permitir. Vamos a defender nuestras conquistas y avanzar por nuevos derechos. Porque la razón nos asiste y nuestros reclamos son justos. Además, los y las integrantes de nuestro Secretariado Nacional no tienen cargos públicos ni son candidatos ni candidatas por ningún partido.

Desde nuestras organizaciones siempre levantamos nuestras reivindicaciones con propuestas concretas, iniciativas que surgen desde abajo, pensadas por los y las que necesitan su implementación urgente. Entre estas leyes está:

E Salario Básico Universal

Protección de Cinturones Verdes

Ley de Envases con Inclusión Social

Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo

Ley de Góndolas

Ley de Tierra, techo y Trabajo

Pesca Artesanal

Abordaje Integral de la Economía Popular

Tierra a los Polos Productivos

Urbanización de los Barrios Populares

Ley Integral de Cuidados Comunitarios

Reparación histórica de la agricultura familiar e indígena para una nueva ruralidad en la Argentina

Nosotros y nosotras proponemos la universalización del salario. Se trata de reconocer el trabajo de todos y todas, tanto de quienes están en el sector formal como en el informal. Todos y todas contribuimos a la riqueza social: desde un productor hortícola hasta una desarrolladora informática. Todos y todas merecemos un piso mínimo de ingresos. La Argentina tiene capacidad de financiar un salario básico universal equivalente a un tercio del salario mínimo y superior a la línea de indigencia para garantizarle un piso de ingreso al conjunto de la clase trabajadora. Esto debe realizarse ya. Los derechos de los argentinos y las argentinas están por encima de las ambiciones de los acreedores externos como el Fondo Monetario Internacional.

Luego, en la medida que el crecimiento económico, las políticas macroeconómicas adecuadas y la capacidad de las organizaciones comunitarias y las PyMEs lo permitan, estos trabajadores y trabajadoras que reciban el salario universal irán accediendo a trabajos mejor remunerados en el sector privado o en la economía popular organizada. Pero mientras tanto, no se puede someter a millones de familias argentinas que se inventan su propio trabajo cada día a la más espantosa indigencia.

Sabemos que el salario universal no resuelve todos los problemas. Nuestro país es tremendamente desigual y padece todas las enfermedades propias del mal desarrollo que afectan a los países dependientes. La sobreurbanización de las grandes ciudades y el despoblamiento del campo; el saqueo de materias primas y riquezas naturales no industrializadas; la degradación y corrupción de las instituciones. Además, el peso de la deuda externa contraída por el último gobierno neoliberal constituye otro lastre que impide planificar un proceso de reconstrucción nacional con desarrollo humano. No vemos que desde la política surjan ideas para cambiar esta realidad. Tal vez es hora de que nos escuchen más, porque como dice el Papa Francisco: “el futuro

de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los Pueblos; en su capacidad de organizar y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio”.